



América Latina Hoy

ISSN: 1130-2887

latinohoy@usal.es

Universidad de Salamanca

España

Cruz, José Miguel

Violencia y democratización en Centroamérica: el impacto del crimen en la legitimidad de los
regímenes de posguerra

América Latina Hoy, núm. 35, diciembre, 2003, pp. 19-59

Universidad de Salamanca

Salamanca, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30803502>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

VIOLENCIA Y DEMOCRATIZACIÓN
EL IMPACTO DEL CRIMEN EN LOS REGÍMENES DEMOCRÁTICOS
*Violence and democratization:
the impact of crime in the democratic regimes*

José Miguel CRUZ
Instituto Universitario de Opinión Pública
✉ mcruz@iudop.uca.edu.sv

BIBLID [1130-2887 (2003) 35, 19-59]
Fecha de recepción: septiembre del 2000
Fecha de aceptación y versión final: noviembre del 2000

RESUMEN: El propósito fundamental del artículo es analizar el impacto que la violencia común y la delincuencia tienen en los procesos de democratización en América Central, especialmente a los países centroamericanos. La violencia y el crimen, para los procesos de democratización, representan una amenaza para el ciudadano a los regímenes surgidos en el contexto político. El artículo parte de los resultados de un estudio que realizó la UCA entre 6.700 ciudadanos en países centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) en 1999 y se analiza la percepción que tienen los ciudadanos de la inseguridad pública con el nivel de apoyo político.

Palabras clave: democratización, apoyo político.

ABSTRACT: The main purpose of the article is to analyze the impact that common violence and crime, which currently affect the processes of democratization in Central America, especially to the Central American ones, represent a threat to the citizen and to the regimes that have emerged in the political context. The article starts from the results of a study conducted by the UCA between 6,700 citizens in Central American countries (Guatemala, El Salvador and Nicaragua) in 1999 and analyzes the perception that citizens have of public insecurity at the level of political support.

Key words: democratization, political support.

I. INTRODUCCIÓN*

A inicios del siglo XXI, la violencia se ha convertido en un gran problema social a nivel mundial. De acuerdo con el *Reporte Mundial de Violencia y Salud*, publicado por la Organización Mundial de la Salud (Krug *et al.*, 2002), aproximadamente 1,6 millones de personas pierden sus vidas cada año debido a la violencia: la violencia es una de las causas más frecuentes de mortalidad en personas entre 15 y 44 años de edad. Con la excepción del África Subsahariana, la región de América Latina y el Caribe se destaca como una de las más violentas en el mundo. Pero mientras África tiene que lidiar con la violencia producida por guerras civiles y conflictos étnicos, las principales fuentes de violencia de América Latina son la violencia social y la criminalidad.

La ola de criminalidad y violencia social que invadió a América Latina en las décadas de 1980 y 1990 coincidió con las transiciones a sistemas democráticos, o apareció luego del fin de las guerras civiles, las cuales lograron ampliar la esfera política. De forma paradójica, en el caso de Centroamérica, el crimen y la inseguridad pública surgieron cuando las sociedades abandonaron los gobiernos autoritarios y se convirtieron en democracias (Call, 1999). Más aún, dentro de los países de América Latina, la subregión de Centroamérica, particularmente Guatemala, El Salvador y Honduras, se destaca como la más violenta; mientras que Nicaragua presenta niveles moderados de crímenes violentos y Costa Rica se constituye en la excepción de la zona, junto con su democracia récord establecida hace más de cincuenta años. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, el crimen violento ha sucedido a la guerra civil y a la violencia política, y a pesar de los nuevos regímenes con libertades civiles y competencia electoral, estos países se han convertido en las sociedades más inseguras del hemisferio occidental.

Con estos antecedentes, es importante cuestionarse hasta qué punto los niveles de violencia e inseguridad pública pueden representar amenazas a los procesos de democratización que actualmente caracterizan a la región. La suposición común sobre un cambio de régimen es que el desempeño económico juega un rol importante en la estabilidad o en la ruptura de los regímenes políticos, al reforzar o erosionar la legitimidad de los mismos (Lipset, 1994) o al establecer las condiciones para un intercambio fluido entre los actores políticos (Przeworski *et al.*, 1996); sin embargo, hay muy pocos estudios que vinculan al crimen y a la inseguridad pública con la democratización. Más aún, la tendencia renovada de estudiar el papel de la cultura política y la democracia no parece haber considerado lo suficiente el efecto de la inseguridad pública en las actitudes y normas que apoyan las democracias y los procesos de democratización. En este sentido, los países de Centroamérica en situación de posguerra (Guatemala, El Salvador

* Agradezco los comentarios y sugerencias de Laurence Whitehead, Stephanie Kitchen, Proochista Ariana y John Bayley. Traducción de Susan Greenbalt. La versión en castellano de este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del Programa Sociedad sin Violencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo El Salvador. Mis sinceros agradecimientos a Marcela Smutt, a los miembros de la mesa directiva del programa, Héctor Dada, Mauricio Gaborit, Cecilia Gallardo de Cano y Salvador Samayoa y a los evaluadores anónimos de la Revista *América Latina Hoy*.

y Nicaragua), constituyen un caso para truir un régimen democrático y el erosionados por el efecto negativo de

Este trabajo tiene como objeto analizar en las actitudes y valores (culturales y particulamente la legitimidad), la guerra. De esta manera, pretende analizar el sistema por parte de ciudadanos extraídos de encuestas de opinión realizadas en Nicaragua en el año 1999¹. La pobreza y la inseguridad reducen el apoyo a la democracia en la posguerra.

II. EL CAMBIO DE RÉGIMEN EN CENTROAMÉRICA

Por muchas razones, Centroamérica es una de las regiones más violentas de América Latina. Aunque es posible identificar factores que América Central ha tenido en su desarrollo, la característica más determinante es la existencia de procesos de guerra y paz que tuvieron lugar en los últimos treinta años. Las largas guerras revolucionarias y contrarrevolucionarias en América Latina en una de las regiones más violentas del mundo. Entre 1979 y 1980. A diferencia de otros países, las guerras civiles entre dos grandes facciones en Centroamérica estuvieron marcadas por la ausencia de un líder político.

Sin contar a Costa Rica, que ha permanecido en paz, Centroamérica representa una de las regiones más pobres, la inequidad, la violencia y la pobreza. Los niveles de desigualdad en Centroamérica, que han aumentado en los últimos años, han caracterizado a la región. Alrededor de 45% de su población viviendo bajo la línea de pobreza, y los niveles de desigualdad en Centroamérica, considerada como la región más desigual de América Latina, considerada como la región más desigual de América Latina (Lipset, 1994).

Guatemala, El Salvador y Nicaragua, durante la mayor parte del siglo XX, vivieron en la década de 1940, que terminó con la oportunidad de experimentar resultados positivos.

1. Estas encuestas se aplicaron en 1999 y fueron realizadas por la Universidad de Pittsburgh. Agradezco a los profesionales de la encuesta por permitirme usar las bases de datos.

a lo que sucedía en el resto de Latinoamérica. Diferentes condiciones y procesos llevaron a la escalada de conflictos armados y guerras internas entre las guerrillas de izquierda y los regímenes militares en Guatemala y en El Salvador; mientras que en Nicaragua, después de la caída de la dictadura de Somoza y el establecimiento de la Revolución Sandinista, se estableció una guerra contrarrevolucionaria con el fin de derrotar al régimen sandinista. Las transiciones políticas y el establecimiento de las democracias formales llegaron con la finalización de las guerras, la firma de los pactos de paz y la celebración relativamente justa y libre, de elecciones².

Aunque cada país tuvo, entre 1980 y 1990, su propia ruta hacia la transición política, todos ellos comparten por lo menos tres características que vale la pena considerar para efectos del análisis político. Como asegura Córdova Macías para el caso de El Salvador (1996), es posible decir que las transiciones políticas en los países de Centroamérica en situación de posguerra se presentaron en tres dimensiones. Primero, la transición de la guerra a la paz; segundo, la transición de gobiernos militares a civiles; y tercero, una transición más amplia de regímenes autoritarios a regímenes democráticos.

II.1. De la guerra a la paz

Probablemente, la característica más notoria de las transiciones políticas centroamericanas es el paso de una guerra civil más o menos generalizada a la paz política. En los tres casos, es posible concluir que las transiciones únicamente se completaron cuando se terminaron los conflictos armados. En el caso de Guatemala y El Salvador, el logro de la paz está intrínsecamente vinculado con los procesos de reformas incluidos en los tratados de paz; mientras que en Nicaragua, el Tratado de Sapoá, firmado en 1988, estableció las condiciones que llevaron a las elecciones definitivas del año 1990 (Torres-Rivas, 2001a). Ningún otro país de América Latina experimentó una transición política en la dinámica de una negociación para la paz.

Las guerras establecieron las condiciones bajo las cuales las élites políticas negociaron las transiciones y las guerras influyeron en la calidad y en la profundidad de los Acuerdos de Paz. Por lo tanto, cada transición sólo puede ser explicada por medio de una evaluación de la guerra que la precedió; y en el caso de América Central, los conflictos eran bastante diferentes. El conflicto guatemalteco es visto generalmente como el más largo y el menos equilibrado de la región; el salvadoreño se destaca como la guerra más intensa y abarcadora de la región; mientras que el conflicto nicaragüense fue el que más apoyo recibió por parte del extranjero.

2. Ha habido mucha discusión sobre cuándo iniciaron y finalizaron las transiciones políticas en cada país de Centroamérica. El objetivo de este trabajo no es abordar esta discusión, aunque por motivos prácticos, utilizaré la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala y El Salvador y las elecciones de Nicaragua de 1990, como los eventos de resolución de estas transiciones.

En el caso de Guatemala, Toc... dera guerra civil sino una guerra... la cual tuvo dos momentos diferen... do surgió un grupo guerrillero fo... tes fueron prácticamente vencido... Este levantamiento y la doctrina reforzaron un tipo de plataforma... mió y exterminó posteriormente... la década de 1970, se dio otro le... una gran campaña militar dirigida... (Schirmer, 1998). Aunque algunas... formar la URNG (Unidad Revolucionaria) representar un desafío real para... de Paz se firmaron sólo cuando... futilidad de prolongar la guerra... paz no alteró dramáticamente el... malteco como la oligarquía. Aun... ciones del sistema de seguridad, p... los crímenes cometidos antes y d...

En El Salvador, la resolución «empate» político y militar. La guerra civil de la década de 1980, luego de una serie de elecciones recurrentes que impidió la elección de Estado de octubre de 1972, moderada y al Partido Comunista, de los cuales se integraron en el FMLN y la conflictividad política en guerra civil, localizado principalmente en las zonas rurales y las ciudades durante los primeros años. Aunque los primeros esfuerzos de paz comenzaron en 1984, ninguna de las partes ya que estaban convencidas de la victoria final (Villalobos, 1989). La ofensiva final, la posibilidad de una victoria militar de 10 años de guerra, una victoria militar nacional completa las condiciones para la paz en 1992. Dadas las condiciones de paz, los salvadoreños fueron los más ambiciosos y las condiciones para un gobierno de paz.

La guerra nicaragüense fue impulsada por los Estados Unidos, que apoyó la toma del poder de los sandinistas por la llamada Resistencia Nacional –que co...

Nacional, mosquitos (población indígena de la Costa Atlántica) y campesinos—la cual adquirió gran importancia a mediados de la década de 1980. Esta fuerza, conjuntamente con el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, logró reducir la capacidad del régimen sandinista para administrar los problemas del gobierno. La guerra se concentró prácticamente en las zonas rurales y nunca alcanzó las ciudades, pero tuvo un impacto significativo tanto en la economía como en la sociedad nicaragüense, ya que tuvo un costo humano de aproximadamente 50.000 vidas (Torres-Rivas, 2001a; 2001b). Así, el régimen sandinista fue forzado a negociar la paz en 1989, aunque ya había ganado la guerra de forma militar para fines de 1988. Esto llevó a la celebración de elecciones en 1990, las cuales fueron ganadas por la oposición, liderada por Violeta Chamorro. Posteriormente, se dio un largo proceso de pacificación, que incluso superó la calendarización de la transición.

II.2. Del control militar al control civil

Debido a las guerras internas o al carácter autoritario de los régimes centro-americanos, el ejército jugó un papel central en el control del poder en estos países. Así, las transiciones políticas se orientaron a expulsar a los militares del poder o del gobierno, ya sea por medio de la finalización de la guerra o por la remoción de los mismos de los sistemas internos de seguridad y de la esfera política.

En Guatemala y El Salvador, donde el poder estaba directamente controlado por los militares antes de la década de 1980, las guerras le proporcionaron a los ejércitos la suficiente autonomía y supremacía sobre los civiles, inclusive cuando estas sociedades comenzaron a tener elecciones en la década de 1980, estando en situación de conflicto armado. Aunque ambos países tenían presidentes civiles (desde 1982 en El Salvador y 1986 en Guatemala), el aparato militar tenía una gran influencia en el ámbito político y controlaba los sistemas internos de seguridad. Esto se manifestaba en dos niveles: primero, en el control directo de las instituciones coercitivas –la policía y las oficinas de inteligencia–; y segundo, en el desarrollo de amplias redes de colaboradores civiles, que ayudaban no sólo como fuentes de contrainteligencia, sino también como agentes de represión diaria y de violencia. En El Salvador estas redes eran conocidas como «defensas civiles». Las raíces de esta red se remontaban a comienzos del siglo XX y durante la guerra civil, se llegaron a reclutar hasta cerca de 300.000 miembros, principalmente de las zonas rurales (Stanley, 1996). En Guatemala, la creación de las Patrullas de Autodefensa Civiles (PAC) en 1982 tuvo una enorme influencia en el curso de la guerra y también en la dinámica social comunitaria. Con casi un millón de miembros, las PACs ocupaban casi al 20% de la población adulta guatemalteca para realizar tareas de guerra sucia y de represión (Torres-Rivas, 2001b).

En ambos países, el ejército, al ser retirado del ámbito político por medio de los Acuerdos de Paz, tuvo que entregar las instituciones de seguridad interna y disolver las redes de colaboradores civiles (Sieder, 2001). En este aspecto, el logro de El Salvador fue superior al de Guatemala y al de otros países que experimentaban reformas de

seguridad en el contexto de una
cuentan ahora con una seguridad
un poder mucho menor al que te

En Nicaragua, los procesos de Sandinista (EPS) no fueron resultado de los acuerdos entre la presidencia y la seguridad interna fue desmantelada la agencia del Ministerio del Interior y la reducción de los EPS y la Policia Popular por antiguos combatientes de la Causa Sandinista y El Salvador, y aunque los sandinistas crearon un tipo de redes de defensa civil, ésta es más violento de sus contrapartes en la sistemática de los derechos humanos que se produjeron después de 1979» (Dunkin, 1992).

Después de las transiciones, de las cuales provenían de las Centroamérica no sólo le retiraron también crearon una amplia legitimidad en el contexto de paz. Esto tendría consecuencias centroamericanas de la posguerra.

II.3. Del régimen autoritario al de

El fin de las guerras, las firmas de los acuerdos de paz y la consolidación democrática en el establecimiento de instituciones democráticas y el establecimiento de la paz. A pesar que en la década de 1980 se logró la paz en la mayor parte de la América Latina, los conflictos imperantes incluyeron la violencia y el terrorismo. En particular, en el Perú, la lucha entre el Estado y las FARC-EP y el MRTA, así como entre las FARC-EP y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron conflictos que se prolongaron por más de una década. La paz se logró con la firma del Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la Construcción de la Paz entre el Estado y las FARC-EP, y la firma del Tratado de Paz entre el Estado y el MRTA.

Ha habido mucho debate en nuevas democracias centroamericanas sobre si las élites americanas condujeron a democracias que no tienen el alcance de este trabajo.

En Guatemala, El Salvador y a la creación de los primeros regímenes democráticos (Sieder, 2001). Esto es lo que García llamó «democracias fundacionales».

requerían el reemplazo de los regímenes oligárquicos relativamente permanentes que prevalecieron desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970, por los regímenes prodemocráticos y electorales que emergieron durante el período de las guerras civiles. De tal manera que la experiencia de la democracia, o por lo menos, de un régimen no autoritario, era relativamente nueva en estas sociedades. Mientras que en el Cono Sur, las transiciones a la democracia implicaban cierta restauración de las viejas instituciones y de las reglas del juego político; en Centroamérica éstas eran casi inexistentes. Los nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños no tenían experiencia con instituciones democráticas, por lo que han tenido que aprender desde cero. De hecho, estas condiciones representaron retos adicionales para los pequeños y pobres países centroamericanos. Las instituciones necesitaban ser creadas, y eso requería, además de estructuras, hábitos, habilidades y procedimientos que las hicieran funcionar; en otras palabras, un tipo de cultura política institucional. Esto era una tarea difícil; pero era aún más difícil considerando que las instituciones que tenían que ser reformadas o creadas eran las mismas que lidiaban con el orden y la seguridad y que, por tanto, ostentaban el recurso del uso de la fuerza.

Distintas evaluaciones catalogan la transición salvadoreña como la más exitosa de las tres transiciones. De manera efectiva, la transición excluyó al ejército del ejercicio de la política (Call, 2002); reformó casi completamente sus instituciones de seguridad y las colocó bajo mando civil; frenó la violencia política y estableció las reglas para elecciones relativamente abiertas, justas y competitivas. Sin embargo, fuertes limitaciones en torno al reforzamiento institucional han arrojado dudas acerca de la firmeza de la transición (Call, 2002). Los resultados de la transición nicaragüense, por su parte, tardaron más en observarse. Aunque también separaron al ejército del campo político; desarmaron el aparato de seguridad y sostuvieron las elecciones competitivas más participativas de la región, los nicaragüenses tuvieron que lidiar con una violencia concentrada en algunas partes del país debido a la imposibilidad de otorgar condiciones favorables a los antiguos combatientes. Los incidentes armados no son ahora tanto problema como lo fueron en el pasado, pero siguen siendo fuente de inestabilidad. El caso menos promisorio ha sido Guatemala, país en el cual el ejército, a pesar de los Acuerdos de Paz y la transformación civil de los aparatos de seguridad, continúa ejerciendo una cantidad significativa de poder, la cual es utilizada para supervisar las instituciones civiles y para moldear la política y la dinámica social en el nivel local, dentro de comunidades rurales e indígenas (Schirmer, 1998; Sieder, 2001).

Así, los procesos de democratización que surgieron de las transiciones son significativamente frágiles. La evaluación de Karl de las nuevas democracias en Centroamérica asegura que la posibilidad de que las frágiles estructuras democráticas de la región se expandan, se consoliden o sean capaces de generar resultados para la población es también baja. Varias evaluaciones de las nuevas democracias centroamericanas han resaltado el problema del desempeño de estos regímenes (Cardenal y Martí i Puig, 1998). De acuerdo a una de estas evaluaciones, se comprueba que el desempeño de los regímenes democráticos apenas ha sido positivo en algunos aspectos y claramente negativo en otros (González, 1998). Se han identificado dos áreas para este problema de desempeño.

Primero, la incapacidad de proveer el rendimiento económico, que no es la primera es el eje central de este tema y de seguridad generados por la violencia. El proceso de democratización en las Américas, tanto que debilitan la legitimidad de los gobiernos.

III. VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA

Con la excepción de Colombia, que ha vivido guerras civiles y de violencia política durante las guerras internas de América Latina, sin embargo, muchos estudios y agencias de desarrollo sostienen que Centroamérica es la región más violenta en el mundo. La violencia individual y los conflictos étnicos que se dan en Centroamérica y en Sudamérica y Latinoamérica se destaca como la más alta.

La violencia en Latinoamérica es un problema grave. Por muchos años, Colombia ha sido la región con tasas de homicidios más altas, mientras que Chile y Uruguay tienen las tasas más bajas (De Mesquita Neto, 2002). Los países latinoamericanos no sólo tienen altas tasas de violencia, también sus instituciones comunitarias y estatales son débiles, lo que aumenta la magnitud real del problema de la violencia.

Algunos países comenzaron a enfrentar la violencia y crimen. El Salvador, que ha sido uno de los países más violentos, se ubió en los mismos niveles de violencia que Costa Rica, que ha sido apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Una encuesta realizada encontró que El Salvador había tenido 150 asesinatos por 100.000 habitantes entre los años 1992 y 1993. La encuesta del Banco reportó que en 1993, 150 asesinatos por 100.000 habitantes, alcanzó tasas de casi 150 asesinatos por 100.000 habitantes (Banco Interamericano de Desarrollo, 1999)⁴. Un análisis de la victimización realizada en la encuesta Latinobarómetro, realizada en 1999, mostró que

3. La violencia individual se utiliza para proteger a las personas y es implícita en los conflictos políticos y sociales. 4. La violencia individual es una medida de protección contra la violencia social. KRUG *et al.* (1999) informaron que el 15% de la población mundial de la Salud.

4. Aunque estudios más recientes han mostrado que las cifras de violencia están sobreestimadas debido a problemas en la medición, se han informado que ambos países, conjuntamente, tienen tasas de violencia más altas que las de otros países, tomando como medida la tasa de homicidios.

El Salvador y Venezuela habían sido víctimas de algún crimen violento en el período de un año (Gaviria y Pagés, 1999). La misma encuesta mostró que casi todos los países de América Latina tenían tasas superiores a un 30% de victimización de viviendas.

CUADRO I
VICTIMIZACIÓN Y TASAS DE HOMICIDIOS EN AMÉRICA LATINA EN LA DÉCADA DE 1990*

País	Victimización (% de hogares)	Tasas de homicidios (por 100.000 habitantes)
Argentina	38	4,8
Bolivia	34	Nd
Brasil	38	23,3
Chile	31	3,0
Colombia	37	89,5
Costa Rica	37	5,6
Ecuador	42	15,3
El Salvador	47	41,3
Guatemala	55	75,3
Honduras	37	45,0
México	43	17,8
Nicaragua	37	18,3
Panamá	28	10,9
Paraguay	33	4,0
Perú	38	11,5
Uruguay	25	4,4
Venezuela	45	16,0

* Las tasas de victimización son de Gaviria y Pagés. Las tasas de homicidios han sido tomadas de las fuentes más recientes y confiables posibles, especialmente en el caso de los países de Centroamérica.

Fuente: GAVIRIA y PAGÉS (1999); BUVINIC *et al.* (1999); DE MESQUITA NETO (2002); CIEN (2002); PNUD (2001); KRUG *et al.* (2002).

Por lo tanto, no sería incorrecto decir que, debido al crimen, América Latina constituye actualmente una de las regiones más inseguras del mundo, con los países centroamericanos encabezando la lista. Guatemala, El Salvador y Honduras tienen niveles superiores al promedio regional, mientras que Nicaragua se sitúa cerca de la media. Sólo Costa Rica se mantiene como la excepción de la región. El punto es que la violencia y la crisis social no son desconocidas en esos países centroamericanos afectados por el crimen en la década de 1990. Como hemos visto en la sección anterior, durante el siglo XX, las sociedades centroamericanas habían sido gobernadas por regímenes militares o autoritarios. Estos regímenes utilizaban la violencia para

neutralizar y controlar la oposición y la ciudadanía (Torres-Rivas, 2001b). Sin embargo, la violencia continúa moldeando la vida de los centros urbanos que residen en Guatemala y El Salvador, y es en el momento en que surgieron las demandas de justicia y de recuperación que se preocupa

Las manifestaciones de violencia y la criminalidad en estos tres países centroamericanos, tanto en Guatemala como en El Salvador y Honduras, presentan muchas diferencias. Sin embargo, tanto las diferencias como las similitudes representan cambios en la situación de criminalidad, pero la violencia también es un factor importante de comprender el impacto del régimen. En el resto de los países centroamericanos, los siguientes párrafos describen la situación de la violencia en los países centroamericanos.

La similitud más destacada entre los países centroamericanos es que están experimentando un aumento en su tasa de homicidios. De los tres, todos ellos están experimentando una alza en sus tasas de homicidios. En Guatemala, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en 1997, un año después de la finalización del conflicto armado interno, era de 75,3 (De Mesquita, 2002); pero en 1999, la cifra había aumentado a 10,9. En El Salvador, de acuerdo con las cifras más recientes disponibles, las cifras alcanzaron un punto alto en 1997, de 41,3, y comenzaron a declinar hasta 2002, cuando se convirtió en uno de los países en posguerra más seguros de Centroamérica. Aunque también exhibió alzas en los homicidios, la tasa de homicidios en las tendencias no fueron tan altas como en Guatemala. En Honduras, se mencionó anteriormente, Nicaragua es un país más seguro y menos violento en comparación con sus vecinos centroamericanos. Sin embargo, el incremento democrático es posible notar que entre 1991 y 1993, que hizo llegar a Nicaragua a 10,9 habitantes, pero este incremento continuó hasta el final de la década.

Todo esto lleva a la identificación de la violencia y la criminalidad en posguerra, la cual tiene que ver con los fenómenos reales. Como veremos, la violencia y la criminalidad pública tiene particular importancia en las transiciones a las democracias. Además de las transiciones, las políticas también fueron seguidas por períodos de inseguridad debido a la difusión de la violencia y la criminalidad. En Centroamérica, después de las guerras y la violencia, se produjeron cambios significativos en la situación de la violencia y la criminalidad. En Guatemala, un año después de la finalización del conflicto armado interno, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes era de 75,3 (De Mesquita, 2002); pero en 1999, la cifra había aumentado a 10,9. En El Salvador, de acuerdo con las cifras más recientes disponibles, las cifras alcanzaron un punto alto en 1997, de 41,3, y comenzaron a declinar hasta 2002, cuando se convirtió en uno de los países en posguerra más seguros de Centroamérica. Aunque también exhibió alzas en los homicidios, la tasa de homicidios en las tendencias no fueron tan altas como en Guatemala. En Honduras, se mencionó anteriormente, Nicaragua es un país más seguro y menos violento en comparación con sus vecinos centroamericanos. Sin embargo, el incremento democrático es posible notar que entre 1991 y 1993, que hizo llegar a Nicaragua a 10,9 habitantes, pero este incremento continuó hasta el final de la década.

los guatemaltecos clasificaban la delincuencia como su principal preocupación; tres años después, en marzo de 1998, el porcentaje de guatemaltecos que se referían a los problemas de violencia era del 46% (CIEN, 2002), mucho más alto que los porcentajes asignados a otros problemas. En El Salvador, la variación es aún más marcada, al igual que los cambios drásticos en las tasas de criminalidad. En 1990, ninguna de las encuestas de opinión pública reflejaba que los salvadoreños estaban preocupados por la delincuencia; las principales preocupaciones giraban en torno a la situación económica, el desempleo y la guerra³; pero para fines de 1993, un año después de la firma de la paz, casi el 40% de la población expresaba preocupación sobre la violencia criminal (Cruz, 2003). En Nicaragua, donde la variación fue menos intensa, Cuadra reportó que, después de la guerra, «la inseguridad que ahora se refiere a situaciones de seguridad pública, gradualmente se convierte en el primer punto de la agenda nacional» (2002: 189). El implacable aumento del crimen fue un factor importante en este punto.

Los guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses están ahora más preocupados por la violencia común que lo que estuvieron en el pasado, inclusive, por la violencia política. Como lo expresó una campesina salvadoreña en una entrevista sobre inseguridad: «En el pasado, si no nos involucrábamos en política, nada pasaba: nadie lo mataba a uno o a sus parientes; pero ahora es diferente: aunque uno no se involucre en política y sólo se preocupe por su trabajo, no importa, porque uno puede ser asesinado por alguien que entra a su casa y lo asalte» (Cruz, 2000a).

Estas creencias señalan una nueva característica de la violencia en la Centroamérica de posguerra: su naturaleza impredecible. A diferencia de la inseguridad creada por la violencia y la represión impuesta por régimenes autoritarios y militares, en los cuales las personas sabían casi de forma instintiva cuáles áreas sociales y políticas estaban prohibidas por el régimen y, que por lo tanto, podrían aumentar el riesgo o la incertidumbre personal; la violencia y el crimen de posguerra actualmente desafían la seguridad pública al gestar temores sociales difusos.

Pero, como ya ha sido mencionado, no todos los países en posguerra exhiben los mismos tipos de violencia. A pesar de las similitudes en términos de tendencias, o más aún, en términos de la inseguridad pública, hay diferentes tipos de delincuencia y violencia común que afectan a las sociedades centroamericanas de forma distintiva. De manera general, mientras que Guatemala y El Salvador se han separado de Nicaragua en términos de violencia global, también se han distinguido por el gran problema del crimen organizado (secuestros, robos a bancos, redes de narcotráfico) y las pandillas juveniles (Moser y Winton, 2002).

Las formas predominantes de la violencia en la situación global de inseguridad pública en Guatemala son la delincuencia y el crimen común, las cuales se concentran en las áreas metropolitanas y se relacionan con el crimen organizado (Rodríguez y De León, 2000); pero, los linchamientos públicos constituyen probablemente la particularidad más importante de la violencia de posguerra en Guatemala. De acuerdo a CIEN (2002), entre los años 1996 y 2000 se han dado casi 200 linchamientos, los cuales han tomado

5. El porcentaje de las personas que mencionaban el problema del crimen era sólo de un 1%.

la vida de 625 personas en este país se presentan en áreas de población rural y urbana de la comunidad para castigar a sospechosos de un tipo de violencia que raras veces se da. Algunas autoras atribuyen este fenómeno a la evolución de conflictos en Guatemala, como el asesinato de los sospechosos de ser miembros del ejército guatemalteco, de comunidades indígenas y mestizas. Esta estrategia permitió la infiltración de las fuerzas armadas en la vida comunitaria y promovió el castigo a los líderes comunitarios y a los miembros de la guerrilla que continuaron operando en las áreas indígenas. «Poder del pueblo» a aquellos sacerdotes y autoridades legales acusadas de pertenecer a la guerrilla.

Esto conduce a la consideración de Paz, específicamente en el área de los investigadores (Dunkerley y Sieder, 1992). La cuestión de seguridad se tornó problemática cuando los militares continuaron interviniendo en las zonas rurales. Los recientes han señalado el papel que desempeñan las autoridades legales acusadas de p

En El Salvador, por el contrario, en 1993 y 1994, la violencia salvadoreño. Aunque el crimen y los asesinatos estaban altos en los años posteriores a la firma del acuerdo de paz, el problema de crimen es aquel cometido en contra de las personas. Los asesinatos se convirtieron en un tipo de violencia que había dos tipos de crimen y violencia: uno con motivación económica, que principalmente se cometía en San Salvador; y otro contra viudos. Este tipo de crimen se cometía en el occidente del país y se hizo evidente

6. Entrevistas con Jennifer Schi

7. En El Salvador, el concepto Civil para referirse a aquellos tipos de va» o delincuencia, que se refiere a los vador.gob.sv/violencia/capitulo2.htm).

et al., 2000). Después de 1998, tanto la «violencia social» como la «delincuencia» parecen haberse reducido de forma significativa, pero las pandillas juveniles, que se encuentran cada día más vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico, continúan siendo una de las principales fuentes de crimen y de violencia, en las zonas urbanas y rurales del país.

Finalmente, de acuerdo a los principales investigadores locales, la violencia nicaragüense también ha tenido dos vertientes (Saldomando, 1999; Cuadra, 2002); pero, en este caso, la división es entre, por un lado, el crimen común y la violencia que se asemeja a una delincuencia con motivaciones económicas, que también se concentra en las ciudades; y, por otro lado, la violencia que «se vincula con condiciones específicas relacionadas con la inestabilidad causada por la guerra y a las posteriores condiciones de fragilidad social y política» (Saldomando, 1999: 134). En otras palabras, los actores del segundo tipo de violencia son aquellos que jugaron un papel en la dinámica política local del conflicto armado, y por lo tanto, su uso de la violencia continúa estando relacionado con algún tipo de demanda social articulada. Los investigadores nicaragüenses han denominado «violencia inorgánica» al primer tipo de violencia y «violencia orgánica» a la segunda.

De acuerdo a datos proporcionados por Cuadra (2002), la violencia orgánica fue la principal fuente de inseguridad pública en los primeros años de la transición política. En 1991, el número de acciones armadas ejecutadas por los diferentes bandos de los combatientes desmovilizados o grupos paramilitares fue de 291; éstos alcanzaron su máximo valor en 1993, con 709 acciones, las cuales declinaron en los años posteriores. Por otro lado, aunque los incidentes de inestabilidad social experimentaron una caída entre los años 1991 a 1995, volvieron a aumentar en 1996 –probablemente por las elecciones que se llevaron a cabo ese año– para disminuir nuevamente en los años siguientes. Esto significa que la denominada violencia orgánica ha estado cediendo en los últimos años, mientras que la delincuencia común va en aumento.

Todas estas características de la violencia de posguerra en América Central señalan otro componente importante que distingue a la violencia de la región de la del resto de países en Latinoamérica, a excepción de Colombia. La violencia en América Central no es sólo un problema urbano, sino que también constituye un problema rural. La mayoría de los informes recientes sobre violencia en Latinoamérica la presentan como un problema eminentemente urbano, debido a los niveles de inseguridad que se experimentan en grandes ciudades como el Distrito Federal en México, São Paulo o Caracas (Arraigada, 2002). Sin embargo, en Centroamérica, como ya lo hemos visto, la violencia no sólo se ha concentrado en las ciudades, sino que también en las zonas rurales. Definitivamente, la delincuencia común ha sido «el problema» mayor, pero es imposible estudiar y comprender la ola de violencia de posguerra en Centroamérica sin considerar los linchamientos en las comunidades rurales guatimaltecas, las masacres a causa de venganzas personales en áreas cafetaleras en El Salvador y el levantamiento de antiguos combatientes armados en algunas regiones de Nicaragua.

Estas consideraciones son importantes para comprender las consecuencias de la violencia. El característico «componente rural» de la violencia de posguerra en

Centroamérica tiene un fuerte impacto de la violencia que destruye las condiciones de vida social (Moser y Winton, 2002), al igual que en 1999 y al desgastar la cultura política. Esta última constituye el alcance más amplio de los temas de cultura política y la democratización en Centroamérica.

IV. MARCO TEÓRICO: CONDICIONES DE LEGITIMIDAD Y VIOLENCIA

Ha habido mucha discusión sobre los requisitos y si éstos constituyen menes postransicionales (Karl, 1990, 1999, publicado por primera vez en 1989), que acepta ampliamente que una cosa es la transición y otra muy distinta es la consolidación de la democracia ya establecida.

En el primer caso, la postura es que tales condiciones existan, si políticas puede hacer posible un ro que en el caso de Centroamérica democrática sólo fue posible cuan- versas –que iban de intereses ec- 2001b)–, pactar acuerdos para es-

El segundo caso se refiere a las circunstancias que hacen que un régimen autoritario sea reemplazado por un régimen autoritario de otros que llevan al establecimiento de una transición democrática; más bien, en la otra dirección, ayuden a la sostenibilidad y el caso de los regímenes centroamericanos que hacen funcionar a la dictadura, aquellas que se enfocan a las circunstancias que vinculan con el desempeño económico de cierto conjunto de valores y el desempeño del régimen. El artículo se enmarca en este último.

El concepto de cultura política (1963), quienes la definieron como la comprensión y actitudes que tienen los individuos hacia la política de los miembros de una sociedad, ellos clasificaron los diferentes tipos de cultura política.

de cultura política, la participativa, tiende a predominar en las sociedades democráticas. Esto fue retomado posteriormente por Lipset (1994: 3), quien aseguró que «la democracia requiere de una cultura de apoyo, de la aceptación por parte de la ciudadanía y de las élites políticas del principio que fundamenta la libertad de expresión, comunicación, asociación, religión, de los derechos de los partidos de asociación, del gobierno de la ley, de los derechos humanos y otros similares. Estas normas no se producen de un día para otro». En esta línea, Diamond argumentaba que «independientemente de otras variables, la cultura política es importante para la democracia y el desarrollo de una cultura democrática, no puede tomarse a la ligera como el resultado natural de una práctica democrática o diseño institucional» (1993: 7).

Así, un régimen democrático sólo puede subsistir cuando la población –masas y élites– tienen la certeza de que las instituciones políticas existentes son las más adecuadas para la sociedad (Lipset, 1960); cuando la mayor parte de la población ve a este régimen como *the only game in town* (Linz y Stepan, 1996), o «el único juego en la ciudad». Esta certeza no se crea de un día para otro. En los regímenes democráticos que no dependen de la fuerza, la legitimidad es el producto del desempeño del sistema. Emana de las percepciones de satisfacción de las necesidades básicas de la mayor parte de la población, y está relacionada con el comportamiento real de las autoridades y de los grupos de poder (Lipset, 1994). Como lo señaló Diamond (1993: 13): la legitimidad «se deriva, en parte, del desempeño de un régimen democrático a lo largo del tiempo, pero también se ve influenciada (especialmente en la vida temprana del régimen) por la manera en que instituciones democráticas específicas se articulan con las formas tradicionales y legítimas de autoridad, y luego por la socialización, la expansión de la educación y otros tipos de cambio social y cultural».

Lo anterior nos lleva a un par de consideraciones, las cuales son particularmente relevantes en el estudio de los casos centroamericanos. Primero, el desempeño es un desafío particular en las sociedades que están aprendiendo, por primera vez, sobre cómo funciona un régimen democrático. Debido a que no hay memoria histórica sobre cómo funciona la democracia, la presión por el logro de resultados es excepcionalmente crítica, especialmente cuando se concibe el vínculo entre la democracia y la satisfacción de necesidades, como es el caso en América Latina (Linz *et al.*, sin fecha). Segundo, todas las fuentes tradicionales de autoridad en Centroamérica están relacionadas con el ejército y con el uso abierto de la fuerza (Holden, 1996). Esto puede significar que la legitimidad y el apoyo político para los regímenes democráticos en Centroamérica se han basado en la capacidad del sistema de oprimir el desorden. Por esta razón, el desempeño del régimen, que constituye la base para la legitimidad, no sólo es evaluado por el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, como lo propuso Lipset originalmente, también se construye sobre la capacidad de hacer cumplir la ley y mantener el orden (Diamond, 1993).

No todos estos temas tienen la misma importancia para la construcción de la legitimidad y la generación de apoyo al sistema. Los temas económicos siempre han atraído más interés, porque afectan la calidad de vida de la población, especialmente en aquellos países con mayores niveles de pobreza e inequidad, como en los de América Latina.

Las personas tienden a evaluar el impacto de la violencia en función de la riqueza que han podido adquirir, la credibilidad, la transparencia o el respeto por las reglas. Sin embargo, en los últimos años, el problema de la legitimidad ha comenzado a desestabilizar, como resultado de los cambios.

La violencia que predomina en las sociedades centroamericanas es un factor que limita el desarrollo económico y el apoyo político necesario para la consolidación de una cultura política democrática, por lo que es necesario evaluar su impacto y las implicaciones que tiene para la legitimidad. La violencia es un factor que limita el desarrollo económico y el apoyo político necesario para la consolidación de una cultura política democrática, por lo que es necesario evaluar su impacto y las implicaciones que tiene para la legitimidad.

Aunque la literatura sobre violencia y legitimidad en Centroamérica se ha enfocado al impacto del crimen organizado y la violencia en el establecimiento del Estado de Derecho, la legitimidad pública, la mayoría de los estudios se centran en el impacto de la violencia e inseguridad en la vida cotidiana y en las percepciones de seguridad. Los estudios empíricos sobre la legitimidad y violencia común en Centroamérica son escasos, retomando el marco analítico propuesto por Lipset (1994). Sin embargo, las palabras: la violencia y la inseguridad, entre otras razones, reducen la credibilidad de las autoridades y las características de la violencia y la legitimidad.

Esto no quiere decir que la violencia y la inseguridad no generan falta de legitimidad y apoyo político. Sin embargo, es necesario decir que la violencia es necesaria para la consolidación de la democracia. Los estudios empíricos de democratización muestran que la violencia y la inseguridad pueden jugar un papel importante en la consolidación de los sistemas democráticos al debilitar la legitimidad y la credibilidad de las autoridades y las características de la violencia y la legitimidad.

8. La mayor parte de la literatura sobre violencia y legitimidad se centra en el impacto de la violencia política y no al crimen organizado.

de inestabilidad y regresiones autoritarias. Centroamérica no es la excepción de esta tendencia negativa; más aún, estos países han sido inestables aun sin haber conocido régimes democráticos. A juzgar por la historia en otras latitudes, no hay ninguna razón para pensar que los actuales e híbridos régimes democráticos estarán exentos de estos retrocesos.

La comparación de esta relación entre los tres países centroamericanos de posguerra, con características socioeconómicas similares, pero con diferencias en los procesos de democratización y niveles de criminalidad, constituyen un marco perfecto para probar las hipótesis propuestas en los párrafos anteriores.

V. EL ENFOQUE METODOLÓGICO: LA INVESTIGACIÓN POR ENCUESTAS

Como ya se ha señalado, esta sección se basa en el análisis de datos de encuestas de opinión pública llevadas a cabo en Centroamérica, y se concentra en el análisis de datos levantados en entrevistas a guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses. La suposición básica es que las creencias, actitudes y vivencias de las personas constituyen categorías importantes para el análisis de los hechos políticos, y las encuestas son un medio para abordarlas.

V.1. *Datos*

Este estudio utiliza tres encuestas del proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica de la Universidad de Pittsburg. Las encuestas se aplicaron en tres países centroamericanos en situación de posguerra durante el año 1999, utilizando cuestionarios que contenían un conjunto de preguntas similares. Los datos combinados hacen una muestra total de 6.738 entrevistas. Los tamaños de las muestras para cada uno de los países fueron: Guatemala, 1.200; El Salvador, 2.914 y Nicaragua, 2.624. Todas las entrevistas se realizaron en español, por personal local entrenado, a excepción de 48 entrevistas que se condujeron en dialectos mayas en Guatemala. En cada país, se diseñaron muestras nacionales probabilísticas para representar con precisión la distribución de la población. Debido a que en cada país se realizaron muestreos adicionales para incorporar a cierta población neta, los datos brutos finales fueron ponderados con la finalidad de mantener una distribución representativa de la muestra. El error muestral para las encuestas de Nicaragua y El Salvador es inferior a $+/- 0,02$ (2%) y $+/- 0,028$ (2,8%) para la de Guatemala.

V.2. Items v variables

V.2.1. Violencia, victimización e i

Se utilizó un solo ítem de medida de crímenes y violencia en los análisis. Se preguntó si los entrevistados habían sido o no víctimas de algún tipo de crimen en los últimos doce meses. En las encuestas se usaron las mismas palabras.

La inseguridad también se marginal de las encuestas no contempla ser desarrollados. El ítem de inseguridad en el barrio en que reside y tomando en cuenta el robo, ¿qué tan seguro se siente el guro?». Este ítem fue utilizado en las palabras exactas del ítem utilizadas en la encuesta, se siente caminando por la noche un poco inseguro, bastante inseguro,

V.2.2. La legitimidad como apoyo

El impacto de la violencia, violencia política democrática se medirá en términos medio de una escala de apoyo político. El modelo de apoyo al sistema propuesto de El Salvador y Nicaragua, la encuesta recibe un puntaje del 1-7. Ésta fue utilizada por Seligson en varios estudios (2000). Los ítems son: a) ¿Hasta qué punto?; b) ¿cuánto respeto tiene usted?; c) tan orgulloso se siente del sistema político del país?; y e) ¿hasta qué punto los ciudadanos son protegidos por nuestro sistema? Los ítems fueron sumados y luego convertidos en una escala de apoyo político y 10 el más alto. Cronbach para Nicaragua era de 0.82. La de apoyo político difuso se consideró diferente, en una escala métrica de 0-100 navales; b) ¿cuánta confianza tiene usted?; c) tan siente por el sistema de gobierno que fueron convertidos a una escala únicamente de 0-100.

de los otros países. El Alfa de Cronbach mostró un nivel mediano-bajo de confiabilidad: 0,52%.

V.3. Las hipótesis empíricas

La hipótesis empírica sostiene que las personas que han sido víctimas de crimen común o violencia tenderán a mostrar, con más frecuencia, bajos puntajes en la escala de apoyo político al sistema que aquellos que nunca fueron víctimas. Adicionalmente, aquellos que expresan sentimientos más fuertes de inseguridad debido al crimen, también tenderán a obtener bajos puntajes en la escala de apoyo político al sistema que aquellos que expresan cierto grado de seguridad.

Estas hipótesis serán evaluadas utilizando pruebas estadísticas de significación, para establecer una relación probable entre victimización e inseguridad y la variable cultural mencionada anteriormente. Se utilizarán regresiones de cuadrados mínimos ordinarios (OLS, en inglés) para probar las interacciones entre estas variables y otras que puedan ser críticas para la legitimidad de los sistemas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

VI. LOS HALLAZGOS

VI.1. Los resultados: victimización y sentimientos de inseguridad

El primer paso es considerar los resultados generales de las variables en cuestión, obtenidas de las bases de datos: victimización, inseguridad y los constructos de apoyo

CUADRO II

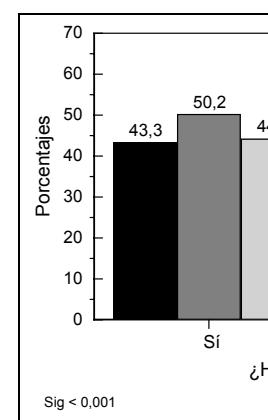
VICTIMIZACIÓN Y SENTIMIENTOS DE INSEGURIDAD EN NICARAGUA, EL SALVADOR Y GUATEMALA (en porcentajes)

País	Victimización personal	Sentimientos de inseguridad de los ciudadanos			
		Muy seguro	Algo seguro	Algo inseguro	Muy inseguro
Nicaragua	14,2	27,5	35,4	21,8	15,3
El Salvador	22,2	23,3	34,5	23,8	18,5
Guatemala*	22,9	25,8	24,2	22,1	27,9

* Las respuestas a los sentimientos de inseguridad en Guatemala no son del todo comparables, ya que se utilizó una pregunta diferente, tal como se expuso en la sección anterior.

Fuente: Elaboración propia.

9. Ver la descripción de los ítems y de las escalas en el Anexo.

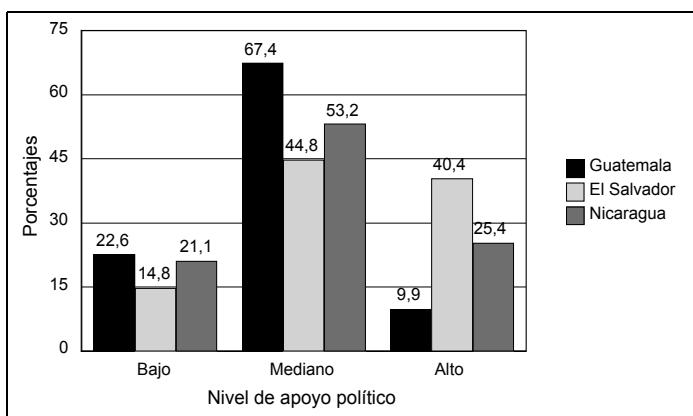


Fuente: Elaboración propia.

VI.2. Los resultados: el apoyo al sistema político

Tal y como se explicó en la sección metodológica, la medida para el apoyo político en Centroamérica fue un conjunto de ítems que extraen el apoyo difuso por las instituciones del sistema. Todos estos ítems fueron convertidos a escalas del 0 al 10 para sondear el nivel de apoyo político que cada país tiene. Para ilustrar las diferencias y similitudes en los niveles de apoyo político en América Central, la Figura II presenta una comparación de los resultados, ampliamente categorizados en tres niveles: bajo, medio y alto apoyo para el sistema¹⁰. El resultado es muy interesante, porque muestra que los ciudadanos centroamericanos no presentan los mismos niveles de apoyo político para sus respectivos sistemas. Como se puede observar, el público salvadoreño muestra los niveles más altos de apoyo político, ya que el 40,4% de los encuestados se ubican en los puntos más altos de la escala y sólo el 14,8% en los más bajos. De forma contraria, los guatemaltecos se destacan como los que expresan menos apoyo para su sistema. De acuerdo a las cifras, sólo un 10% de los encuestados manifestaron un fuerte apoyo para sus instituciones y un 22,6% se ubicaría en la sección más baja de la escala. Finalmente, Nicaragua se encuentra en medio de los dos países, ya que concentra a más del 75% de su población en posiciones medias o altas en la escala¹¹.

FIGURA II
**NIVELES DE APOYO POLÍTICO PARA LOS SISTEMAS
CENTROAMERICANOS EN SITUACIÓN DE POSGUERRA, 1999**



Fuente: Elaboración propia.

10. Esta clasificación se realizó por motivos de exposición y se construyó sumando los puntos en la escala, de la siguiente manera: de 0 a 3,33 = nivel bajo; de 3,33 a 6,66 = nivel medio; de 6,66 a 10 = nivel alto.

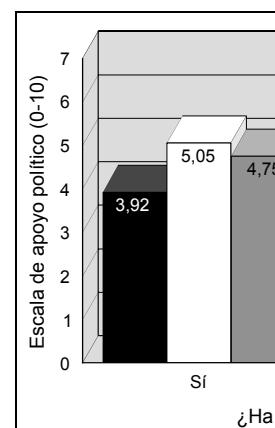
De manera general, estos resultados políticos en América Central son más estable de los tres aspectos. La estabilidad podría estar relacionada con esos países.

VI.3. Victimización, sentimientos

VI.3.1. Las relaciones particulares

Una vez establecida la distribución de las agresiones y los tipos de crímenes en el país, se observa que las cifras son más o menos similares entre las tres regiones. Una vez establecida la distribución de las agresiones y los tipos de crímenes en el país, se observa que las cifras son más o menos similares entre las tres regiones. Una vez establecida la distribución de las agresiones y los tipos de crímenes en el país, se observa que las cifras son más o menos similares entre las tres regiones.

APOYO POLÍTICO
EL

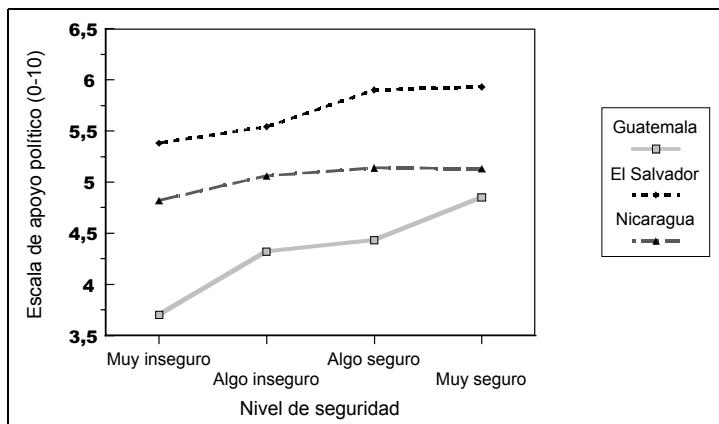


Fuente: Elaboración propia. Sig

han sido víctimas (por lo menos en el año anterior a la conducción de la encuesta) alcanzan un puntaje de 5,95. En otras palabras, hay casi un punto de variación entre los dos grupos. A pesar de que las diferencias son pequeñas, en todos los casos resultaron ser estadísticamente significativas con las pruebas del ANOVA¹², pero en El Salvador los resultados de la prueba fueron más contundentes. Este último resultado implica que las personas que han sido víctimas de crímenes se diferencian claramente del resto de la población en términos de los niveles de apoyo político que expresan hacia el régimen.

Estos resultados establecen una relación individual directa entre la victimización y el apoyo político al sistema. Los datos también muestran otra relación individual, en este caso, con los niveles de sentimientos de seguridad. De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura IV, mientras más seguros se sienten los centroamericanos, más tienden a apoyar al sistema, por lo menos en términos actitudinales. Al examinar los

FIGURA IV
 APOYO POLÍTICO Y SENTIMIENTOS DE INSEGURIDAD
 EN GUATEMALA, EL SALVADOR Y NICARAGUA, 1999



Fuente: Elaboración propia. Sig. < 0,05 para Guatemala y El Salvador.

promedios de apoyo político en cada país, las tendencias muestran que las personas que se sienten seguras obtienen mayores puntajes en la escala (Guatemala, 4,85; El Salvador, 5,93 y Nicaragua, 5,13) que aquellas que expresan niveles importantes de inseguridad y temor al crimen (Guatemala, 3,7; El Salvador, 5,38; y Nicaragua, 4,82). No obstante, en este caso, las diferencias son estadísticamente significativas sólo para los casos de Guatemala y El Salvador, pero no para Nicaragua. Esto implica que las diferencias en los puntajes de apoyo político en Guatemala y El Salvador no son producidas al azar, sino que son un efecto de la condición de inseguridad de sus ciudadanos;

12. Pruebas de Análisis de Varianza.

mientras que en Nicaragua, esta no es una variable y no precisamente por la

Estas cifras parecen confirmar que las variables reducen el apoyo político de los países de Centroamérica, ya que muestran que las personas que tienden a obtener puntajes más bajos en la escala de inseguridad tienen que ser probadas para que su apoyo político sea más importante que el vínculo entre victimización y apoyo político. La relación con otras variables, como la edad y el nivel de educación, afecta más a personas educadas que a personas sin educación, de forma más amplia de la forma en que fu-

VI.3.2. El impacto de la violencia

Como se ha mencionado anteriormente, la violencia y la inseguridad son factores que influyen en el apoyo político. Los países que perciben al sistema y su desempeño como más seguros y más justos. Una prueba de Regresión de Cuadrados Múltiples muestra que tanto la victimización como la inseguridad, con respecto a los niveles de apoyo político.

Dado que el apoyo político se ve negativamente influenciado por las variables sobre los niveles de información y las condiciones socioeconómicas, se realizó una prueba de Regresión de Cuadrados Múltiples para probar la interacción entre todas estas variables y el apoyo político. Aunque las tasas de posesión de armas y tasas de homicidio están relacionadas con el apoyo político, no obstante, estas variables probablemente no tienen una relación directa con el apoyo político, por lo que fueron descartadas de la ecuación. Se utilizaron los datos recopilados en 1999 para desarrollar la ecuación.

Los resultados empíricos de la regresión múltiple para los tres países centroamericanos se presentan en la Tabla 13. Los resultados muestran que el apoyo al sistema político, mientras que la edad y el nivel de educación se utilizaron como predictores.

13. Estas variables se incluyeron porque se sabe que la violencia en la que residía la persona. Por lo tanto, se les sumó la tasa local de homicidios en Huehuetenango (3 por 100.000). En el caso de Nicaragua, a todas las personas que vivían en el país se les sumó la tasa de posesión de armas por 100.000 habitantes: 2.842; de acuerdo con el informe de la ONU, que crearía un índice *dummy* (artificial) (Indice de violencia).

ingreso familiar, empleo, escala ideológica (izquierda-derecha) y victimización por violencia política. Género, edad y educación fueron introducidas como variables socioeconómicas de control, ya que este tipo de variables pueden influir en los resultados de las pruebas, en tanto que las condiciones de género, edad y niveles educativos determinan la forma en que las personas perciben la situación política. Se incluyeron también el ingreso familiar y el empleo, porque de acuerdo a la teoría clásica de legitimidad y apoyo político este último puede ser moldeado por la capacidad del sistema de proporcionar bienestar económico y riqueza, por lo que se espera que personas con bajos salarios o que se encuentran desempleados no apoyen al sistema de la misma forma que lo hacen las personas acomodadas. La ideología, basada en una escala del 1 al 10, también se introdujo, considerando las preocupaciones sobre la importancia del autoposicionamiento ideológico para el apoyo político (Norris, 1999b). Finalmente, y debido a los cambios que se dieron en las transiciones políticas centroamericanas, en las pruebas de Guatemala y El Salvador se incluyó la victimización debido a violencia política pasada. Como éstos son regímenes diferentes a los que aplicaban intensos niveles de violencia política, esta variable podría ser útil para identificar un tipo de «legitimidad por default (omisión)» (Linz y Stepan, 1996), lo que significa que las personas que fueron víctimas de la violencia política en el pasado podrían apoyar los regímenes actuales porque ya no constituyen una amenaza de victimización directa¹⁴.

Los resultados del modelo final son extremadamente interesantes y confirman, en la mayoría de los casos, el vínculo entre la violencia y el apoyo al sistema político en los nuevos regímenes centroamericanos, pero esta relación es moldeada por otras variables, las cuales en algunos casos son más importantes que los temas de violencia e inseguridad.

Los coeficientes revelan que la edad es un predictor importante para el apoyo político (significancia < 0,05) y que se asocia de forma negativa con la escala de apoyo político. En los tres países, las personas jóvenes eran más propensas a apoyar el sistema que las personas adultas o mayores. Probablemente, esto sea porque, como dice Seligson (2002: 422) «... la gente mayor ha vivido lo suficiente como para decepcionarse de la política y tiene una visión agotada del sistema político», contrario a los jóvenes, que tienen esperanzas en el sistema y en lo que éste les puede ofrecer.

De igual forma, los datos muestran que la educación tiene una relación negativa significativa con el apoyo político en El Salvador y Nicaragua, pero no en Guatemala. Esto quiere decir que los salvadoreños y nicaragüenses con mayores niveles de educación tienden a apoyar menos al sistema que las personas con menos educación, que tienden a expresar un mayor apoyo. Las razones para estos resultados no son claras; probablemente, se produce un mayor grado de escepticismo en los ciudadanos que están

14. Aquí, estoy suponiendo que la principal amenaza venía del gobierno y no de las fuerzas insurgentes. En Guatemala y El Salvador, las Comisiones de la Verdad establecieron que entre el 90 y 95% de las violaciones a los derechos humanos fueron ejecutadas por fuerzas gubernamentales o paragubernamentales (ver COMISIÓN DE LA VERDAD DE EL SALVADOR, 1993; y COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO, 1996).

Variables Independientes

(Constante)

Género

Edad

Educación

Ingreso familiar

Empleo

Ideología

Víctima de violencia política en el pasado

Victimización de crimen

Sentimientos de inseguridad

N

R²

F Test

Modelo es OLS. Coeficientes no están estandarizados. N = 1.200. R² = 0,22. F Test = 11,22. donde: 1 = extrema izquierda y 10 = extrema derecha. Víctima = 1 = víctima; 0 = no víctima.

mejor informados sobre la dinámica política, que no son analfabetos o con poca educación, que no son influenciados por el tráfico nacional.

El ingreso familiar mensual es más alto en El Salvador y Nicaragua, pero no de Guatemala. Cambia la significación del resto de las variables: sexo, edad y sentimientos de inseguridad y edad. Sin embargo, el

con la escala de apoyo al sistema político. Mientras que en El Salvador esta relación es negativa, implicando que las personas con ingresos familiares más bajos se inclinan a apoyar más al sistema; en Nicaragua, la asociación es positiva: a mayor ingreso familiar, más alta es la legitimidad que la gente le otorga al sistema y viceversa. Para ambos países (El Salvador y Nicaragua), esta relación es muy fuerte y en el caso de Nicaragua este fenómeno puede explicarse por las teorías que resaltan la capacidad del sistema de dar resultados. En otras palabras, se enfatiza la importancia de un buen estándar de vida para ganar legitimidad. Sin embargo, eso no se aplicaría al caso salvadoreño, en el cual los ciudadanos desaventajados socioeconómicamente parecen estar más cómodos con el sistema que los más ricos. Esta discrepancia entre los casos nicaragüenses y salvadoreños puede ser explicada tomando en cuenta las diferencias en el desempeño económico actual de El Salvador y Nicaragua. Aunque ambos países son pobres y han enfrentado crisis económicas después de la transición, la situación nicaragüense es peor que la de su vecino; los niveles de pobreza e inequidad en Nicaragua son mayores que en El Salvador; y los gobiernos nicaragüenses de posguerra han tenido serias dificultades manejando la situación.

Por su parte, el empleo también resultó estar asociado con el apoyo político en Nicaragua y El Salvador. En este caso, la relación tuvo una orientación negativa, implicando que las personas que no tienen trabajo tienden a expresar más apoyo por el sistema que el resto de la población.

El autopositionamiento ideológico (izquierda-derecha) estuvo asociado de forma positiva en los tres países. Los salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos de derecha expresan más apoyo político para sus respectivos sistemas que los ciudadanos de izquierda. Esto es, probablemente, porque en estos tres países, los gobiernos ejecutivos continúan teniendo una fuerte orientación de derecha. Como lo explica Norris (1999b), basándose en datos de la Encuesta Mundial de Valores, el resultado sobre quiénes ganan y quiénes pierden en la competencia por el poder, influye en la distribución de apoyo político en la población. Los regímenes con orientación de derecha recibirían más apoyo político del público de derecha que del público de izquierda. Los ciudadanos con orientación ideológica de derecha brindarían un fuerte apoyo a los sistemas centroamericanos de posguerra.

Uno de los resultados más interesantes, sin embargo, se refiere al obtenido con la variable de violencia política pasada. Como ya se mencionó, esta variable identifica a los ciudadanos que fueron víctimas de la violencia política previa o durante la guerra. Esta variable sólo pudo aplicarse en Guatemala y El Salvador; y en ambos países, la regresión comprobó la existencia de una relación significativa entre haber sido víctima y la escala de apoyo político. Pero, mientras que en Guatemala se observa una relación positiva, en El Salvador la relación es negativa. Esta «inconsistencia» merece un análisis particular. En Guatemala, los datos sugieren que las personas afectadas por la guerra o por la violencia política, tienden a apoyar más al actual sistema político que los que no fueron víctimas de este tipo de violencia. Una explicación adecuada sería que los guatemaltecos que fueron victimizados están más satisfechos con el presente sistema, porque no representa una amenaza como en el pasado. Ellos reconocerían que vale

la pena apoyar el sistema, a pesa
 río, los salvadoreños expresan su
 sonas que no fueron afectadas en
 el sistema. No hay explicaciones p
 importante considerar los clivajes
 fueron afectados por la violencia p
 tracciones o satisfacciones con el a

La variable de victimización es impo
 vo para el apoyo al sistema políti
 han sido víctimas de violencia co
 que aquellos que no han sido vícti
 es la misma en los tres países. Au
 de Nicaragua muestran una relaci
 que son los más fuertes. La inter
 timización por crimen tiene un efe
 tico. De hecho, la comparación
 aparte de la inseguridad y de la
 más determinante en la forma en
 rior significa que la hipótesis que
 al sistema político, se confirma es
 Por el contrario, en el caso de N
 del modelo, aunque mantiene ci
 educación y la ideología los prin

Los sentimientos de inseguri
 de Guatemala y El Salvador, per
 tras más segura se sienta la gente.
 Esto último no implica que en Nic
 variables, la relación con la insegu
 esto, se confirma, para los casos
 ce que la inseguridad desgasta e
 mientos de inseguridad (qué tan
 crimen) constituyen el predictor i
 victimización por el crimen, la v
 la condición de inseguridad es tan
 violento, pero sólo es ligeramente

En resumen, es posible decir q
 da a la violencia, juegan papeles i
 guerra en Guatemala y El Salvad
 más altas de criminalidad en el h
 de confianza de su población en
 cia, de una forma más evidente q
 ingreso económico, la educación
 la inseguridad en la predicción d

en el caso de Nicaragua, posiblemente, deben buscarse en esos aspectos, más que en la violencia, las causas de insatisfacción de las personas con el sistema y las causas de la inestabilidad del país.

En Guatemala y El Salvador, la violencia y la inseguridad se combinan con la ideología y la victimización por violencia política para explicar el actual apoyo al sistema político. Por lo tanto, los niveles de legitimidad que ostentan los gobiernos están parcialmente determinados por el problema de la violencia. No obstante, es importante reconocer que la victimización y la inseguridad no son los únicos actores en este fenómeno de ruptura de la legitimidad política. De hecho, los indicadores de la magnitud de la varianza mencionada (R^2) son relativamente bajos y sugieren la existencia de un rango más amplio de variables explicativas que no han sido consideradas en el modelo, especialmente para el caso de Nicaragua. Aun en el caso de El Salvador, que presenta la mayor R^2 explicando esta varianza (0,112), hay muchas otras condiciones que no se han considerado y que pueden explicar el apoyo político en este país. En otras palabras, la legitimidad de los regímenes centroamericanos de posguerra puede ser el producto de otras condiciones adicionales a la violencia y la inseguridad, pero la importancia de estas dos es indudable.

VII. CONCLUSIONES

Uno de los problemas que enfrentan los régímenes postransicionales es la necesidad de demostrarle a sus ciudadanos, tanto a las élites como a las masas, que son iguales o mejores que los gobiernos previos a la hora de gobernar. Esta suposición es más crítica cuando se hace referencia a transiciones cuyo resultado ha sido una democracia primeriza como es el caso de los países centroamericanos en situación de posguerra. Como ya hemos visto, Guatemala, El Salvador y Nicaragua no son sociedades que restauraron una democracia previamente existente. En estos tres países, no sólo tuvo que establecerse la democracia como un procedimiento por primera vez en la historia, sino que las instituciones también tuvieron que hacer esto posible. Las instituciones estatales previas estaban tan comprometidas con los régímenes autoritarios, que tuvieron que ser desmanteladas o neutralizadas para dejar que las instituciones democráticas se establecieran.

No obstante, la subsiguiente violencia común ha desafiado la capacidad de los nuevos regímenes para establecerse y entregar resultados a la población, no sólo porque afecta directamente la calidad de vida al amenazar su integridad física mucho más que los problemas económicos, sino también porque su atención compete directamente al tipo de instituciones que tuvieron que ser reformadas o creadas para asegurar el éxito de las transiciones; nos referimos al aparato de seguridad del Estado. Al evaluar el apoyo político a las nuevas democracias con relación a los problemas de violencia e inseguridad, el dilema no sólo tiene que ver con la capacidad del nuevo *establishment* para proveer seguridad, sino también, y de forma más importante, tiene que ver con los procedimientos utilizados para garantizar esa seguridad. Este punto es central a la hora de

estudiar el impacto de la violencia del sistema.

En otras palabras, la eficacia también puede ser medida por su dependiente de qué tan democrática es. Ése es el dilema que genera la violencia cometida en las más variadas ocasiones por violencia como se preocupa en exceso por su seguridad. El régimen postransicional de brindar garantías y puestas e instituciones autoritarias se torna crítico, ya que los sistemas autoritarias.

Éste es el caso de los países específicamente, de Guatemala y El Salvador, de que las nuevas democracias —o— encuentren, al mismo tiempo, en lo que sucede es que ciertas formas de transición causan esta aprehensiones que tienen como resultado entre las élites, los prospectos de las instituciones, de su desempeño y de un proceso de democratización, críticas y efectivas; también es importante el nuevo régimen, así como sus instituciones anteriores, a pesar de los problemas

Para comprender lo que represaron las centroamericanas postransicionales, es necesario experimentar: una transición política, pero no a la paz social, porque la paz social no se logró; una transformación en las relaciones sociales en Centroamérica, porque la transformación de las instituciones no necesariamente implicó cambios en las relaciones entre los grupos colaboradores civiles continúan existiendo conflictos y tensiones entre los tres países, existen más de 2,5 mil desplazados (Villalobos Arias, 2001); y una transición económica, porque la existir con dosis importantes de pobreza y desigualdad.

Este trabajo ha abordado el problema de las democracias centroamericanas y analizar los niveles de apoyo político que existe en la población. Se muestra que existe una gran mayoría que apoya la democracia y que no niega algunos principios básicos de la democracia.

15. Esto también es cierto para Sudáfrica.

aún, debilita la aceptación, por parte de la población, de la legitimidad de los nuevos gobiernos.

Mucho antes de las guerras, la legitimidad en Centroamérica se basaba en la capacidad de los gobiernos militares y dictatoriales de reprimir. La violencia invadía la vida social, lo cual garantizaba la permanencia del autoritarismo por décadas. Así, en Centroamérica las transiciones de posguerra se orientaron hacia la construcción de gobiernos que no se basaran en la fuerza y en la violencia, sino en el apoyo de la población y en las reglas democráticas. Para la mayor parte de personas, la persistencia de la violencia, en condiciones no predecibles y de inseguridad extrema, desafía la utilidad que le atribuyen a dicho cambio y causa dudas sobre qué forma de vida es mejor: la actual o la que se llevaba previamente bajo un orden autoritario.

Los datos empíricos obtenidos de las encuestas con ciudadanos centroamericanos han comprobado la relación entre violencia y legitimidad, medidas por la victimización, los sentimientos de inseguridad y el apoyo al sistema político. Los ciudadanos que fueron afectados directamente por la violencia común, tienden a expresar menos apoyo al sistema que el resto de la población y las personas más afectadas por el temor y la inseguridad, tendieron a sentirse más desencantados con los regímenes de posguerra en Guatemala y El Salvador. La violencia y la inseguridad son, por lo tanto, predictores clave del debilitamiento del apoyo político en Centroamérica, aunque no son los únicos. Más aún, el impacto del crimen en el apoyo al sistema político es regulado por las siguientes condiciones: edad, educación, ingreso, ideología y violencia política anterior. Estos efectos deben comprenderse bajo las diferentes circunstancias y los contextos regionales.

Pero, la principal diferencia entre estos países resultó ser, precisamente, el nivel de criminalidad medido por la victimización personal. En estos países, donde la violencia es particularmente alta y la inseguridad es generalizada, el impacto en el apoyo al sistema y en la legitimidad es significativo (Guatemala y El Salvador); mientras que en Nicaragua, donde la violencia no alcanza niveles extremos, el impacto en la legitimidad es más bien mínimo. En este país, el problema principal es la generación de desarrollo económico y de bienestar; y éste parece ser el principal obstáculo en términos de estabilidad política.

Ahora bien, dadas estas condiciones de extrema violencia, dos caminos son plausibles. El primero, es que el debilitamiento del apoyo político y la legitimidad lleven a un tipo de reacción, por medio de la cual los ciudadanos impulsen a una parte del sistema a ser más efectivo y responsable en términos de seguridad pública. Como lo señalaba Norris (1999c), la falta de apoyo al sistema no necesariamente lleva a una ruptura de las democracias, pero sí a una conciencia crítica ciudadana que insiste en la satisfacción de sus necesidades y presiona para que el sistema sea más responsable y efectivo dentro del marco del Estado de Derecho. El segundo camino, por otro lado, no es tan optimista como el anterior. En éste, las personas pierden la confianza en la democracia y ésta deja de ser la forma ideal de gobierno porque lo que conocen como «regimen democrático» les ha traído más inseguridad y caos, al tiempo que menos respeto por sus derechos civiles.

En este sentido, existen varias lencias en el apoyo político pudiendo que la gente opte por volver a un sistema capaz de enfrentar los problemas narios distintos: primero, que las personas imponer un dictador; o segundo, un sistema autoritario que compita dentro de las condiciones en Latinoamérica, y especialmente la primera posibilidad, aunque ésta

Pero, el segundo camino no p... sitamos un golpe de Estado para contemporánea. Fujimori en Perú, actuales regímenes centroamericanos comprometidos con los ideales y un ejército para establecer un go... podrían convertirse en autoritarios. Se subestima cuando la responsabilidad se pone al ejército, olvidando que éste se encuentra en un juego complejo de fuerzas y la sociedad civil.

Los regímenes autoritarios considerados «sociedad civil» cooperaba con ellos (1996)– fue un elemento importante en el caso de El Salvador. Con las excusas del cri... para alimentar movimientos incívicos que acepten los términos de devolver al Estado de Derecho. La violencia así un papel importante en el desarrollo.

Pero existe otra forma en que esto, debilita la democratización. Un manifiesto político de corte autoritario, una estructura institucional. Una falta de un gobierno civil o al apoyo de las autoridades a los ciudadanos para que ignoren o apliquen las leyes por su propia cuenta como inútil. Ésta es, creo, la amargura que las democracias centroamericanas. Los gobiernos a vivir con la violencia que ignoran al Estado, el cual ha perdido lo sucedido en Guatemala, con los sistemas familiares y la extensión de las redes y las instituciones del Estado partidistas de limpieza social, y motivar

defenderse¹⁶. En este caso, las instituciones no sólo se tornan inútiles, sino que también contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado.

Pero además, la violencia puede convencer a los ciudadanos a que respalden medidas y acciones destinadas a combatir la delincuencia de corte claramente antidemocrático y violatorio de los derechos humanos y los principios fundamentales del Estado de Derecho. En circunstancias de extrema inseguridad, como la que viven Guatemala y El Salvador, los mismos habitantes pueden respaldar medidas gubernamentales, que van desde leyes hasta acciones policiales, que niegan los principios básicos y que permiten el abuso por parte de los operadores de los sistemas de seguridad y de justicia. Éste es el caso, en la actualidad, de los países del norte de Centroamérica; en donde el problema de las pandillas juveniles ha impulsado a los gobiernos de turno de esos países, a formular legislaciones que violan los derechos fundamentales de los niños y de las personas sospechosas de pertenecer a las pandillas.

Al final, el vínculo entre la violencia y la legitimidad es más que un proceso unidireccional. La violencia no sólo debilita el apoyo político al sistema, también una frágil legitimidad puede generar crímenes. Los ciudadanos decepcionados del sistema pueden ignorar las leyes y utilizar la violencia en su vida cotidiana, ya que no creen en la capacidad del Estado para resolver problemas, protegerlos y castigar a aquellos que incumplen las reglas; o también pueden promover la remilitarización de las leyes y de la vida pública. Estos procesos implican un círculo vicioso en el que la violencia y el desencanto político arruinan los planes y los prospectos de la democratización.

Ésta es la gran diferencia entre los países de América Latina y los países africanos al sur del Sahara, en los cuales la violencia es incontrolable. Algunos de estos países africanos apenas tienen Estado y es imposible hablar de sistema político en lugares en los que la vida de la gente está controlada por señores de las guerras regionales. América Central, por el contrario, tiene Estados bien formados que se están esforzando por establecer una democracia, pero la violencia común constituye un obstáculo y el talón de Aquiles para este proceso.

Para comprender mejor cómo suceden estos procesos, es necesario considerar otras variables de cultura política. Este trabajo no las ha abordado por motivos de espacio. Sin embargo, un análisis crítico de las condiciones que aún prevalecen en las instituciones centroamericanas y de la cultura política podría llevar a una conclusión pesimista. Desdichadamente, los centroamericanos no parecen estar tan convencidos sobre la democracia como lo estaban justo después de la transición. Datos del Latinobarómetro reflejan que en el año 2002, guatemaltecos y salvadoreños expresaban menor preferencia por un régimen democrático que en 1996; sólo en Nicaragua se ha observado un aumento en el apoyo popular por la democracia como sistema de gobierno. Adicionalmente, una encuesta de medición de la cultura política en Guatemala en el año 2001, mostró que la aceptación de los golpes de Estado en la población había aumentado ligeramente

16. Esto ya ha pasado en El Salvador, en donde la Asamblea aprobó en 1999 una ley que le permite a los ciudadanos portar rifles de guerra para luchar contra el crimen, porque el Estado «ya no puede proteger a la «población honesta»» (PNUD, 2003).

a un 47%; también, que un 82% derechos humanos, y que las personas apoyan menos los valores de la ma encuesta de donde se extrae el 55% de los salvadoreños apoyan golpe de Estado; más aún, un análisis de la inseguridad es un predictor importante para el Salvador.

Sin embargo, los datos y los ciudadanos centroamericanos seemen. Tampoco implican que han Centroamérica. Más bien, estos hechos centroamericanas es el lema: los ciudadanos indiferentes se resguardan por el Estado de Derecho. Es una cultura política en la que las personas no implican la ruptura inmediata ni siquiera los prospectos de supervivencia de los ciudadanos, al negar sus libertades. Se rige a todos de manera igualitaria, sin esterilización, pero sí de una especie de formas democráticas.

Al final estos hallazgos dan una efectiva no sólo es necesaria para proteger los derechos humanos, sino para solidificar los procesos de democracia en Centroamérica.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- ALMOND, Gabriel y VERBA, Sydney. *The Civic Culture*. Princeton: Princeton University Press, 1963.

ARRIAGADA, Irma. Seguridad ciudadana en Chile. En *Seguridad Ciudadana, ¿es posible?* (ed.). *Seguridad Ciudadana, ¿es posible?* Santiago: AZPURU, Dinorah. *La cultura democrática chilena: Asociación de Investigadores de la Universidad de Chile*. Temuco: AZPURU, Dinorah. *La cultura democrática chilena: Asociación de Investigadores de la Universidad de Chile*. Temuco: BALOYRA-HERP, Enrique. Elections, Parties and Political Systems in Chile: Preliminary Evaluation. En SELIGSON, Mark A. (ed.). *Democracy in Central America Revisited. Chile*. Washington: BUVINIC, Mayra; MORRISON, Andrew. *Democracy in the Caribbean: A Framework for Analysis*. Washington: Inter-American Development Bank, 1999.

- CALL, Charles T. War transitions and the new civilian security in Latin America. *Comparative Politics*, 2002, vol. 35, n° 1, pp. 1-20.
- Crime and Peace: Why Successful Peace Processes Produce the World's Most Violent Countries. Paper Presented at the *Annual Conference of the International Studies Association* (ISA). Washington, D.C., 1999, February.
- CARDENAL, Ana Sofía y MARTÍ I PUIG, Salvador. *América Central, las democracias inciertas*. Barcelona: Editorial Tecnos y Universitat Autònoma de Barcelona, 1998.
- CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS NACIONALES (CIEN). *Estudio sobre la magnitud y el costo de la violencia en Guatemala*. Guatemala: CIEN, 2002.
- COMISIÓN DE LA VERDAD PARA EL SALVADOR. De la locura a la esperanza. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. [Manuscript], 1993.
- COMMISSION FOR HISTORICAL CLARIFICATION. *Guatemala, Memory of Silence. Report of the Commission for Historical Clarification*, 1996. [Puede encontrarse en: <http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/toc.html>].
- CORBACHO, Ana y DAVOODI, Hamid. Expenditure Issues and Governance in Central America. *Working Paper*, n.º 02/87. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002, n.º 02/87.
- CÓRDOVA MACÍAS, Ricardo. Executive-Legislative Relations and the Institutionalisation of Democracy. En SIEDER, Rachel (ed.). *Central America: Fragile Transition*. London: Macmillan Press, 1996.
- CRUZ, José Miguel. The Peace Accords Ten Years Later. A Citizens' Perspective. En ARNSON, Cynthia J. *El Salvador's Democratic Transition. Ten Years After the Peace Accords*. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center for International Scholars, Latin American Program, 2003.
- *¿Elecciones para qué? El impacto de la cultura política salvadoreña en el ciclo electoral 1999-2000*. San Salvador: FLACSO, 2000a.
- Violencia, democracia y cultura política. *Nueva Sociedad*, 2000b, vol. 167, pp. 132-146.
- CRUZ, José Miguel y GONZÁLEZ, Luis Armando. Magnitud de la violencia en El Salvador. *Estudios Centroamericanos*, 1997, vol. 588, pp. 953-966.
- CRUZ, José Miguel; TRIGUEROS, Álvaro y GONZÁLEZ, Francisco. *El crimen violento en El Salvador. Factores sociales y económicos asociados*. San Salvador: Instituto Universitario de Opinión Pública y el Banco Mundial, 2000.
- CUADRA, Elvira. Nuevas dimensiones de la seguridad ciudadana en Nicaragua. En CARRIÓN, Fernando (ed.). *Seguridad ciudadana, ¿espejismo o realidad?* Quito: FLACSO Ecuador-OPS/OMS, 2002.
- DE LEÓN, Carmen Rosa; OGALDES, Claudinne y LÓPEZ, Claudia. Guatemala: Diagnóstico de la problemática posconflicto. En *Violencia social en Centroamérica*. Managua: CRIES, 1999.
- DE MESQUITA NETO, Paulo. Crime, Violence, and Democracy in Latin America. Paper presented in the *Conference Integration in the Americas*. Albuquerque, New Mexico, April 5, 2002.
- DIAMOND, Larry. Introduction: Political Culture and Democracy. En DIAMOND, Larry (ed.). *Political culture and democracy in Developing Countries*. London: Lynne Rienner Publishers, 1993.
- DUNKERLEY, James y SIEDER, Rachel. The Military: the Challenges of Transitions. En SIEDER, Rachel (ed.). *Central America: Fragile Transition*. London: Macmillan Press, 1996.
- FUNDACIÓN ARIAS. *El arsenal invisible. Armas ligeras y seguridad ciudadana en la posguerra centroamericana*. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2001.

- GARRETÓN, Manuel Antonio y NEWMAN, Edward (eds.). *Democracy and the Rule of Law in Latin America*. New York: United Nations University Press, 1999.
- GAVIRIA, Alejandro y PAGÉS, Carmen. *La democracia en América Latina*. Washington, D.C.: Interamerican Development Bank, 2000.
- GONZÁLEZ, Secundino. La democracia en América Latina. En SANAHUJA, Joseph (eds.). *Centroamérica: hacia una nueva convivencia*. Fundaungo, 2001.
- HOLDEN, Robert. Constructing the Latin American Research Agenda. *Journal of Latin American Studies*, 2002, vol. 34, pp. 72-86.
- KARL, Terry Lynn. The hybrid regime. *Journal of Democracy*, 2002, vol. 3, pp. 72-86.
- Dilemmas of Democratization in Latin America. *Journal of Democracy*, 2002, vol. 3, pp. 1-21.
- KARL, Terry Lynn y SCHMITTER, Philip. Democracy in Eastern Europe. *International Social Science Journal*, 1994, vol. 59, pp. 1-22.
- KRUG, Etienne H.; DAHLBERG, Linda (eds.). *World Report on Violence and Abuse*. Washington, D.C.: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002.
- LINZ, Juan J.; LIPSET, Seymour M. y LINZ, Juan J. *Latin America: Latin America in Transition. The Politics of Democratic Development in Latin America*. Washington, D.C.: Inter-American Development Program, 1994.
- LINZ, Juan y STEPAN, Alfred. Hacia la democracia en América Latina. *Journal of Democracy*, 1999, vol. 2, pp. 29-49.
- LIPSET, Seymour M. The Social Requisites of Democracy. *American Political Science Review*, 1994, vol. 59, n.º 1, pp. 1-22.
- MAILHOLD, Günther y CÓRDOVA MACÍAS, Ricardo. *El Salvador: hacia una nueva convivencia: desafíos y estrategias*. Fundaungo, 2001.
- MÉNDEZ, Juan. Problems of Lawlessness in Latin America. En GUILLERMO, Guillermo y PINHEIRO, Paulo Sérgio (eds.). *Latin America. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1998*.
- MÉNDEZ, Juan; O'DONNELL, Guillermo. *Democracy and the Underprivileged in Latin America*. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1993.
- MORRISON, Andrew y ORLANDO, Marisol. Domestic Violence in the Americas. *Journal of Latin American Studies*, 1998, vol. 30, pp. 1-22.
- MOSER, Caroline y WINTON, Ailsa. Violence Reduction Framework. En VICTIMS AND COMMUNITIES: A Global Framework for Violence Reduction. Washington, D.C.: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002.
- NORRIS, Pippa. Introduction: The Global Support for Democracy. *Journal of Democracy*, 2002, vol. 3, pp. 1-22.
- Institutional Explanations for Political Change. *Journal of Democracy*, 2002, vol. 3, pp. 1-22.
- Global Support for Democratic Change. *Journal of Democracy*, 2002, vol. 3, pp. 1-22.

- Conclusions: The Growth of Critical Citizens and Its Consequences. En NORRIS, Pippa (ed.). *Critical Citizens. Global Support for Democratic Government*. Oxford: Oxford University Press, 1999c.
- PAYNE, Leigh. *Uncivil Movements. The Armed Right Wing and Democracy in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2000.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). *Armas de fuego y violencia*. San Salvador: PNUD El Salvador, 2003.
- *Indicadores sobre violencia en El Salvador*. San Salvador: PNUD El Salvador, 2002.
- PRZEWORSKI, Adam; ÁLVAREZ, Michael; CHEIBUB, José Antonio y LIMONGI, Fernando. What makes democracies endure? *Journal of Democracy*, 1996, vol. 7, nº 1, pp. 39-55.
- RANUM, Elin Cecilie. *Violent Crime in Post-War El Salvador: An Obstacle to the Consolidation of Democracy?* Trondheim: Historisk Institutt, NTNU, 2002.
- RODRÍGUEZ, Mario y DE LEÓN, Mayda. Diagnóstico sobre la situación actual de las armas ligeras y la violencia en Guatemala. En *El arsenal invisible*. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2000.
- RUSTOW, Dankwart. Transitions to democracy: Toward a Dynamic Model. En ANDERSON, Lisa (comp.). *Transitions to Democracy*. New York: Columbia University Press, 1999.
- SALDOMANDO, Ángel. Nicaragua: los rostros de la violencia. En *Violencia social en Centroamérica*. Managua: CRIES, 1999.
- SANTACRUZ, María y CONCHA-EASTMAN, Alberto. *Barrio adentro. La solidaridad violenta de las pandillas*. San Salvador: IUDOP-UCA, 2000.
- SCHIRMER, Jennifer. *The Guatemalan Military Project. A Violence Called Democracy*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998.
- SELIGSON, Mitchell A. The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries. *The Journal of Politics*, 2002, vol. 64, nº 2, pp. 408-433.
- Toward a Model of Democratic Stability: Political Culture in Central America. *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, 2000, vol. 11, nº 2, pp. 1-22.
- SELIGSON, Mitchell A.; CRUZ, José Miguel y CÓRDOVA MACÍAS, Ricardo. *Auditoría de la democracia. El Salvador 1999*. San Salvador: Fundaungo, IUDOP-UCA y University of Pittsburgh, 2000.
- SIEDER, Rachel. War, Peace, and Memory Politics in Central America. En BARAHONA DE BRITO, Alejandra; GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen y AGUILAR, Paloma (eds.). *The Politics of Memory. Transitional Justice in Democratization Societies*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- STANLEY, William. *The Protection Racket State. Elite Politics, Military Extortion and Civil War in El Salvador*. Philadelphia: Temple University Press, 1996.
- TORRES-RIVAS, Edelberto. La pacificación de la guerra. *Foreign Affairs en Español*, 2001a, vol. 1, nº 2, pp. 15-19.
- Foundations: Central America. En GARRETÓN, Manuel Antonio y NEWMAN, Edward (eds.). *Democracy in Latin America. (Re)Constructing Political Society*. New York: United Nations University Press, 2001b.
- VILAS, Carlos. La democratización en los escenarios posrevolucionarios de Centroamérica: antecedentes y perspectivas. En CARDENAL, Ana Sofía y MARTÍ i PUIG, Salvador (comps.). *América Central, las democracias inciertas*. Barcelona: Editorial Tecnos y Universitat Autònoma de Barcelona, 1998.
- VILLALOBOS, Joaquín. Perspectivas de victoria y proyecto revolucionario. *Estudios Centroamericanos*, 1989, vol. 483-484, pp. 11-51.

ANEXOS

ÍTEMES Y VARIAB

Variable	Indicador
<i>Variable independiente</i>	
Crimen	Victimización producida por crimen
Inseguridad	Sentimientos de inseguridad
Violencia política	Victimización durante la guerra
<i>Variable dependiente</i>	
Legitimidad	Apoyo político

ÍTEMES Y VAR

Variable	Indicador
<i>Variable independiente</i>	
Crimen	Victimización producida por crimen
Inseguridad	Sentimientos de inseguridad
Violencia política	Victimización durante la guerra
<i>Variable dependiente</i>	
Legitimidad	Apoyo político

TABLA C
CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES Y LAS ESCALAS DE LA BASE DE DATOS DE GUATEMALA

		Escala	Media	Desviación
	Mínimo	Máximo	Típica	
<i>Variable dependiente:</i>				
Apoyo político	0 = menor	10 = mayor	4,30	2,3
<i>Variables independientes</i>				
Género	1 = masculino	2 = femenino	1,52	0,5
Edad	18	90	43,2	15,9
Educación	0 = ninguna	4 = universidad	1,32	1,1
Ideología	1 = izquierda	10 = derecha	5,54	2,6
Víctima de violencia política	0 = no	1 = sí	0,16	0,3
Víctima de crimen	0 = no	1 = sí	0,22	0,4
Inseguridad	1 = muy seguro	4 = muy inseguro	2,52	1,1

<i>Variable dependiente</i>	
Apoyo político	
<i>Variables independientes</i>	
Género	
Edad	
Educación	
Ingreso familiar	
Empleo	
Ideología	
Víctima de crimen	
Inseguridad	

TABLA D
CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES Y LAS ESCALAS DE LA BASE DE DATOS DE EL SALVADOR

		Escala	Media	Desviación
	Mínimo	Máximo	Típica	
<i>Variable dependiente</i>				
Apoyo político	0 = menor	10 = mayor	5,72	2,3
<i>Variables independientes</i>				
Género	1 = masculino	2 = femenino	1,52	0,5
Edad	18	94	37,9	16,1
Educación	0 = ninguna	18 = universidad	8,05	5,3
Ingreso familiar	0 = ninguno	7 = >US\$ 700	2,65	1,8
Empleo	0 = no	1 = sí	0,58	0,4
Ideología	1 = izquierda	10 = derecha	5,93	2,7
Víctima de violencia política	0 = no	1 = sí	0,36	0,48
Víctima de crimen	0 = no	1 = sí	0,22	0,4
Inseguridad	1 = muy seguro	4 = muy inseguro	2,37	1,0